

LAS TENDENCIAS POLÍTICAS EN LOS COMICIOS PRESIDENCIALES DEL CICLO DE LA PANDEMIA EN AMÉRICA LATINA

Salvador ROMERO BALLIVIÁN

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Las tendencias políticas del ciclo 2014-2019*. III. *Los preámbulos del ciclo electoral y los reajustes del calendario*. IV. *Las tendencias políticas y electorales del ciclo electoral de la pandemia (2020-2023)*. V. *Conclusiones: ¿la derrota de los vencedores?* VI. *Referencias bibliográficas*.

I. INTRODUCCIÓN¹

En un mundo que se había acostumbrado a la perspectiva de haber derrotado a los gérmenes (Harari, 2020), la pandemia del COVID-19 constituyó un fenómeno profundamente desestabilizador. La aparición de un virus contagioso y letal en la ciudad china de Wuhan a fines de 2019 provocó una cascada de repercusiones de tal magnitud en el mundo que se inscribe en las situaciones de consecuencias no lineales denominadas “cisnes negros” por su imprevisibilidad y altos impactos (Taleb, 2020). En efecto, el intento por frenar el avance del virus produjo el cierre precipitado de las fronteras, que alteró las pautas sobre las cuales funciona una economía cada vez más globalizada e interdependiente, con la mayor circulación de bienes, servicios y personas de la historia. En la escala nacional, los confinamientos decretados por numerosos gobiernos paralizaron la economía, limitaron la interacción social al mínimo, incluso supusieron restricciones a derechos y garantías considerados de base. En una dimensión inmediatamente menos visible, la de salud mental, se disparó una ola de ansiedad y depresión.

¹ Este capítulo presenta los resultados de una investigación original realizada para el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Organización de los Estados Americanos.

Hacia mediados de 2023, los decesos oficiales provocados por el coronavirus bordearon los 7 millones en el mundo, en tanto que las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) giraron alrededor del doble, una fracción de los cientos de millones contagiados. América fue el continente más golpeado, pues tres países figuraron entre los cinco más afectados (Estados Unidos, Brasil, México) y la mortalidad per cápita dibujó un panorama igualmente sombrío. El progresivo retorno a la normalidad se aceleró desde el segundo semestre de 2021 gracias a la rápida y eficaz respuesta de la ciencia, que creó modelos de vacunas que ofrecieron la inmunidad básica para que la gente regrese a las actividades presenciales con pocas o ninguna limitación.

Un desorden de semejante dimensión y con impactos en todas las esferas de la vida colectiva evidentemente también incidió en los procesos electorales. Jugó sobre los aspectos directamente operativos: muchas elecciones debieron postergarse y todas las efectuadas entre 2020-2022 se rediseñaron en su logística para evitar focos de contagio. Más allá, dio características políticas propias a ese ciclo. Tal vez no sean perceptibles de forma espontánea pues el análisis tiende a privilegiar la coyuntura nacional como factor explicativo determinante. Empero, en la mirada de conjunto, los rasgos comunes, así como las singularidades, resaltan y se combinan con las variables nacionales. Ponerlas de relieve es el propósito fundamental del texto.

En América Latina, la elección presidencial destaca como el mayor evento político de cada país. Es la cita más política, más nacional —por el abordaje de las cuestiones centrales del país— y más concurrida, la que mejor revela las prioridades de los partidos, así como los comportamientos, las expectativas, ilusiones y las frustraciones de los ciudadanos. Asimismo, es la más susceptible de incorporar factores políticos internacionales en el cálculo, las ambiciones y los temores de los actores. En contraste, las legislativas se hallan, en la mayoría de los casos, acopladas a la presidencial y la inclinación por un partido o candidato suele derivarse de la consulta central. Las subnacionales tienen, por su lado, un componente local marcado, proclive al particularismo y la fragmentación —lo que no impide detectar motivaciones similares de comportamientos—. Las elecciones presidenciales ofrecen la escala pertinente para cernir los ciclos políticos de la región. Tras más de cuatro décadas de la transición, ofrecen una perspectiva amplia para indagar sobre las tendencias de las preferencias electorales de los latinoamericanos y, por lo tanto, de las orientaciones de las políticas públicas y las evoluciones de los sistemas de partidos.

El estudio se centra en los comicios presidenciales celebrados en el “ciclo de la pandemia” (2020-2023), que abarca más de la mitad de la región

(República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua, Honduras, Chile, Costa Rica, Colombia, Brasil y Paraguay). Identifica las pautas comunes y recoge también excepciones y singularidades nacionales. Presenta, en una primera etapa, las líneas dejadas por el ciclo anterior, que cubre aproximadamente la fase 2014-2019 (Romero Ballivián, 2021: 238-254). En ese periodo, la izquierda perdió el terreno ganado a principios del siglo XXI a favor de formaciones conservadoras o de candidatos outsiders que promovieron debates en torno a valores culturales, distintos a las agendas política y económica, hasta entonces monopólicas en la escena pública. Ese punto de partida permite entender mejor las continuidades y las rupturas de la etapa de la pandemia, que empieza en marzo de 2020, en siete ejes centrales: la evolución de la participación; el desempeño electoral del oficialismo y el de las oposiciones; las nuevas agendas en el campo político; el impacto de la polarización en el juego político; el papel de las redes sociales digitales como espacio de campaña y las controversias en torno a la institucionalidad electoral.

II. LAS TENDENCIAS POLÍTICAS DEL CICLO 2014-2019

El escenario político latinoamericano cambió alrededor de 2015. La izquierda retrocedió y las fuerzas conservadoras avanzaron. El desplazamiento del péndulo se asoció con la finalización de la impresionante década de crecimiento económico. Los precios de los productos que América Latina negocia en el mercado mundial se contrajeron y redujeron las tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB); algunos países, como Brasil o Argentina, tuvieron tasas negativas que amenazaron a las franjas más vulnerables de las clases medias y frenaron los progresos de los segmentos pobres.

Desprovistos de resultados de gestión, los gobiernos sumaron el descrédito moral de la corrupción. Ciertamente, la corrupción ha sido un mal endémico en la mayoría de los países. De ninguna manera puede considerarse nueva; a lo sumo, la misma transparencia y el fortalecimiento institucional que impulsaron la democracia, facilitaron la puesta en evidencia de los casos y los primeros enjuiciamientos de autoridades. Por otro lado, careció de un color político específico. Golpeó a los gobiernos de izquierda, porque predominaban, pero concernió igualmente a las gestiones de derecha, y abarcó a políticos de un amplio espectro —con el único denominador común de figurar entre los mejor posicionados para acceder al poder de acuerdo con las encuestas—.

Las continuidades se combinaron con las novedades. A la corrupción con un rostro nacional, asociada a los usos y costumbres de cada país, se añadió una transnacional que se concentró y resumió en el nombre de Odebrecht, la compañía brasilera especializada en infraestructura (no fue la única, aunque sí la más importante en la trama y la más visible por la cantidad de países en las que actuó, los montos que destinó y la sistematicidad y eficiencia gerencial para organizar los sobornos (Morales y Morales, 2019: 1-18).

El salto de escala fue posible por la interconexión económica creciente y el súbito caudal de fondos. De pronto, los gobiernos dispusieron de cuantiosos recursos y de una voluntad de renovar o crear infraestructura de envergadura (carreteras, aeropuertos, teleféricos, represas, inmuebles institucionales, entre otros), muy visibles y de buen rédito ante la población. Los montos de los sobornos se situaron en un rango muy superior a los acostumbrados, al punto que Odebrecht destinó miles de millones de dólares para estas operaciones. En la opinión pública, el volumen de los pagos ilegales agravó el delito. Por último, la corrupción tuvo una inédita faceta electoral, paradójicamente posible por el asentamiento de las rutinas de los comicios.

La devastación política del caso Odebrecht se relacionó con su estrategia: se coludió con autoridades y funcionarios, y para asegurar el éxito de las operaciones también aportó para las campañas de los candidatos presidenciales mejor situados, conocidos de antemano por la estabilidad política y con cronogramas electorales previsibles (en medida menor financió las campañas de parlamentarios clave, sobre todo en sistemas con voto preferente). Entonces, los delitos recayeron sobre las máximas cabezas políticas y partidarias. El daño quedó ilustrado dramáticamente en Perú, con las órdenes de arresto contra los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, el suicidio de Alan García, el encarcelamiento de Keiko Fujimori, dos veces finalista en la presidencial.

Las clases medias indignadas se rebelaron contra la corrupción y el despilfarro; desapareció la tolerancia de la época de la bonanza, que había permitido a varios gobiernos no sufrir mella en su popularidad, como en el caso de Néstor Kirchner (Ollier, 2010: 57-58). Su movilización tradujo asimismo el reclamo por la brecha entre las expectativas de progreso y las mejoras más lentas y modestas en los servicios públicos, la tensión entre niveles cada vez más altos de escolaridad y la traba en el acceso al trabajo formal, entre otras. Las manifestaciones se multiplicaron, convocadas por plataformas descentralizadas a través de redes sociales, con una impronta juvenil, sin líderes visibles, desconectadas de los partidos, con una consigna moral antes que política y una vocación pacífica, incluso creativa en sus modalidades.

Esas protestas, las mayores movilizaciones de la democracia, forzaron la renuncia del presidente guatemalteco Otto Pérez, acusado de dirigir una ramificada red de corrupción, a meses de finalizar su mandato (Torres Rivas, 2015: 4-15). Acorralaron al hondureño Juan O. Hernández, obligado a conceder la creación de una misión internacional de la OEA para luchar contra la corrupción y la impunidad (Mejía, 2019: 286-289). Destiñeron la Copa Mundial (2014) y las Olimpiadas (2016) en Brasil, las competencias de mayor prestigio internacional, logradas por Lula en los tiempos dorados de la economía, pero acusadas de ocasionar inmensos gastos cuando la coyuntura se volcó, lastrando la popularidad de la presidenta Dillma Rousseff (Meneguello y Arquer, 2018: 77-80). En una línea distinta, los jóvenes chilenos desafiaron el costo de la matrícula universitaria, prolongando el malestar de los estudiantes de secundaria de los años previos (Motter y Paz, 2017: 69-90).

En otros casos, las movilizaciones apuntalaron los esfuerzos de la institucionalidad judicial para enjuiciar y sancionar la corrupción (los ministerios públicos y los poderes judiciales cosecharon los frutos del afianzamiento de su autonomía frente a los gobiernos, si bien en muchos casos, la actuación también tuvo coloración política y ambiciones personales de los operadores de justicia). En una situación sin precedentes, expresidentes fueron detenidos por corrupción: Pérez en Guatemala, Antonio Saca en El Salvador, Alejandro Toledo en Estados Unidos para ser extraditado a Perú, Lula en Brasil; otros hallaron refugio en países terceros para eludir el castigo (Mauricio Funes de El Salvador; Rafael Correa de Ecuador, entre otros).

El tablero se hallaba presto para ser reordenado. El retroceso del oficialismo de izquierda benefició la derecha liberal, en una alternancia relativamente clásica, o a outsiders, cuyas campañas cuestionaron el sistema político, pero lejos de la línea ideológica de la ruptura de la década precedente. Al primer caso correspondieron Argentina con Mauricio Macri (2015); Chile con Sebastián Piñera (2017) —que sucedió por segunda vez a Bachelet— y Uruguay con Luis Lacalle (2019). En ellos casos, la candidatura gubernamental no se derrumbó; incluso, en Argentina y Uruguay, ganó la primera vuelta antes de caer por estrecho margen en la segunda (Tagina 2018: 32-35). Al segundo caso pertenece el caso emblemático de Nayib Bukele en El Salvador (2019). Se añadió, en paralelo, una tercera línea que moldeó las elecciones del periodo: las reelecciones conflictivas.

Cuando la elección se planteó como la alternancia de derecha, los candidatos de este campo prolongaron la imagen que los caracterizó desde el final del siglo XX: tecnocráticos, con vínculos con el sector empresarial, o

empresarios ellos mismos, convencidos de la necesidad del fortalecimiento de la economía de mercado y la inserción en la mundialización, enfrentados al modelo del socialismo del siglo XXI, con trayectorias partidarias de importancia variable.

El chileno Piñera (2009; 2017), el paraguayo Horacio Cartes (2013) y el argentino Mauricio Macri (2015) ganaron la Presidencia con la credencial empresarial (y, en algunos casos, en el tope de las fortunas de sus países). Pertenecieron al molde, aunque quedaron segundos, el boliviano Samuel Doria Medina en 2014, el ecuatoriano Guillermo Lasso en 2017 y el salvadoreño Juan Carlos Calleja en 2019. Como tecnócratas liberales se presentaron el peruano Kuczynski, ganador de los comicios en 2016, el mexicano José Antonio Meade del Partido Revolucionario Institucional (PRI), vencido en México en 2018.

Otra carta de esta corriente fue la de líderes jóvenes, herederos de una tradición partidaria con pergaminos. En Uruguay, el colorado Pedro Bordaberry (1960) y el nacionalista Luís Alberto Lacalle (1973), hijos de presidentes, fueron candidatos en 2014 y el segundo ganador en 2019 (Lewit, 2015: 126-129), en tanto que el rival de Rousseff en 2014, Aécio Neves (1960), fue nieto. Integrantes de las elites políticas fueron los presidentes Iván Duque (1976) de Colombia y Mario Abdo (1971) de Paraguay, ambos elegidos en 2018. Ciertamente no se trató de un rasgo novedoso, en la medida que las dinastías políticas han sido frecuentes en América Latina en todo el espectro político, un rasgo que confirma la importancia de la acumulación de capitales (económico, político, social y cultural) para construir los proyectos electorales.

Cuando el impulso del electorado fue la sanción de la corrupción, el rechazo a las elites políticas y al sistema de partidos, los candidatos exitosos llegaron de manera súbita y por vías tangenciales a la palestra principal. Se presentaron como los outsiders que barrerían un sistema corrupto, con un mensaje anti-partidario, bajo banderas políticas nuevas o poco conocidas —aunque ellos mismos tuvieran alguna carrera política, pero lejos de los principales reflectores—. Recordaron a los outsiders de la década previa, con la diferencia de que sus propuestas no se anclaban en la izquierda. En algunos casos, interrumpieron ciclos de alternancia en sistemas de partidos asentados que parecían dotados de estabilidad, como la rivalidad ARENA-FSML en El Salvador o la de PT-PSDB en Brasil.

Sobre esa ola llegó en 2015 el guatemalteco Jimmy Morales, conocido por su faceta de comediante, cuya escueta carrera política resultó una ventaja para empalmar con la voluntad de recambio, en un sistema político

de por sí volátil. En 2019, Nayib Bukele (1981), exalcalde de San Salvador, golpeó de lleno al bipartidismo surgido de los acuerdos de paz y hundido en acusaciones de corrupción que afectaron a expresidentes de ambos lados (FUSADES, 2019). En Brasil, en 2018, Jair Bolsonaro, exmilitar y diputado que jugaba en las franjas extremas y marginales de la derecha, aprovechó la crisis del PT que no pudo postular a Lula y la difícil presidencia de Michel Temer, vicepresidente y sucesor de Rousseff, pero de línea ideológica distinta. Se apropió del electorado del PSDB y cohesionó a los votantes que se definían por su rechazo al PT, convertido progresivamente en “el único sentimiento partidario relevante en la decisión del voto” (Ribeiro, Carreirao y Borba, 2016: 631; Borges y Vidigal, 2018: 53-89).

Por último, y de manera separada, la segunda década del siglo XXI vio la reelección de presidentes sin limitación de mandatos, con predominio de los alineados con el modelo chavista, comenzando en Venezuela por el propio Chávez, reelegido una segunda y tercera vez (2006, 2012), poco antes de fallecer, y de su sucesor Nicolás Maduro (2013; 2018). Siguieron las reelecciones de Morales en Bolivia (2009, 2014 y la fallida de 2019), Correa en Ecuador (2009, 2013) y Ortega en Nicaragua (2011, 2016). En una vertiente ideológica opuesta, en 2017, Hernández se reeligió en Honduras, luego de superar la prohibición constitucional mediante una sentencia judicial (como en Nicaragua y Bolivia, en una vía abierta en Costa Rica, con el doble matiz que ese fallo no contempló la reelección sucesiva ni favoreció al presidente en ejercicio. Treminio y Muñoz Portillo, 2019: 101-122).

Varias de estas elecciones se alejaron de la pauta colectiva latinoamericana en aspectos cruciales. Por primera vez desde la transición reaparecieron elecciones sin perspectiva de alternancia, en un muy grave retroceso democrático y electoral. Ellas se ligaron con la reelección sin límite, por una razón menos conceptual que de realidad política. Eludir la limitación indicó la voluntad de los mandatarios de permanecer en el poder y, en consonancia, se operó el deslizamiento hacia un juego controlado y cerrado de asfixia a la democracia (Levitsky y Ziblatt, 2020).

En Nicaragua, de manera tímida en 2011 y abierta en 2016 (Martí i Puig, 2018: 303-326) y en Venezuela en 2018, las candidaturas representativas de la oposición quedaron, en los hechos, excluidas por disposiciones de los órganos electorales o judiciales, subordinados al Poder Ejecutivo. Estas instancias adoptaron disposiciones que falsearon la competencia hasta restarle incertidumbre al resultado. El minado se produjo más en las fases iniciales de la competencia, menos visibles, que en el conteo de los votos (Briceno, 2023: 10). Las reelecciones de Ortega y de Maduro, rechazadas en el exterior y deslegitimadas adentro, provocaron serias crisis políticas postelec-

torales, que incluyeron violencia y enfrentamientos entre opositores y fuerzas de seguridad o con grupos civiles afines a los regímenes. Desde entonces, ambos países se consideran autoritarios (IDEA Internacional, 2021: 10).

En los otros casos, la reelección se asoció con procesos electorales cuestionados, de calidad técnica mediocre e imparcialidad en entredicho. En Honduras (2017) y Bolivia (2019), la oposición presentó libremente sus candidatos, pero debió librar batallas más desiguales que las habituales en el contexto de las reelecciones latinoamericanas. Los presidentes colocaron el aparato público al servicio de su proyecto, dispusieron de una inmensa ventaja en recursos y publicidad, contaron con organismos electorales sujetos a distintos grados de dependencia.

La protesta contra los resultados sacudió cimientos democráticos frágiles. En Honduras, hubo decenas de muertos. Se llegó a la paradoja de un presidente reelegido que controlaba todos los resortes del poder institucional, pero imposibilitado de avanzar su agenda, por falta de legitimidad. Para salvar en parte el impasse, el oficialismo y la oposición acordaron en consenso el rediseño de la arquitectura institucional, también exigida desde la sociedad (Asociación para una Sociedad más Justa, 2018), y, en los hechos, desestimaron una nueva postulación de Hernández. En Bolivia, la movilización derivó en la renuncia de Morales, la instalación de un gobierno de transición, la convocatoria a una nueva elección con un organismo electoral recompuesto, en medio de una crispada polarización sociopolítica (Romero Ballivián, 2022). Este conjunto de comicios se alejó del núcleo central de las evoluciones de la mayoría de las elecciones del periodo, cuyas características centrales pueden resumirse en siete ejes.

Las tendencias políticas y electorales del ciclo

El primer movimiento fue el señalado desplazamiento hacia el cuadrante derecho de la política. Al igual que en el ciclo anterior, hubo excepciones. La notable fue la victoria en México de Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento, en 2018. Tras el agotamiento de las sucesiones entre el PRI y el PAN, el electorado viró hacia una izquierda con toques de la fase estatista del PRI (Serrano, 2018: 41-55). Se presentó como el adversario más firme del “sistema” y prometió la Cuarta Transformación mexicana (la primera en un siglo, después de dos en el siglo XIX y una en el XX). De hecho, evocó a los candidatos de izquierda de la década precedente, que compitieron varias veces antes de alcanzar la meta y todos favorecidos, a la

larga, por las tácticas del “voto del miedo” de sus contrincantes que los ratificaron, a ojos de la sociedad, como garantes de cambios profundos.

El regreso del liberalismo económico al poder se diferenció de su primera oportunidad, al cierre del siglo XX. Aquella vez, llegó con energía y rico en promesas de progreso: sus planteamientos no se aplicaban desde hacía décadas y con una legitimidad en el cénit por el derrumbe soviético. El retorno se hizo sobre una base discreta y cautas ofertas de políticas públicas antes que de remodelaciones profundas. El entorno había cambiado, en el mundo, por las dudas sobre el capitalismo luego de la crisis financiera de 2008 y el debate sobre la acentuación de las desigualdades (Piketty, 2013), en América Latina por los créditos de gestión que exhibió la izquierda. A su vez, el liberalismo ya había gobernado y asumía las limitaciones que impone la gestión.

El segundo fue la extensión de las primarias como mecanismo para designar las candidaturas presidenciales (Freidenberg, 2016: 31-91). La mutación fue notable desde el retorno a la democracia, cuando los liderazgos partidarios históricos se convirtieron automáticamente en aspirantes presidenciales. Cada vez más países exigen primarias y las sujetan a controles externos, ya sea porque las organizan las entidades electorales o por la posibilidad de plantear recursos efectivos ante esas mismas autoridades. El movimiento es general, igualmente visible fuera de Latinoamérica. La singularidad en la región es la obligatoriedad, la participación de los órganos electorales e incluso la apertura al conjunto de los ciudadanos como votantes.

La razón es doble. Influye la exigencia desde la sociedad y de sectores de los mismos partidos para que las organizaciones sean cada vez más democráticas e institucionales, lo que coloca las elecciones internas en un vértice relevante. Por otro lado, manifiesta el final de los liderazgos indiscutibles e indiscutidos, como los que predominaron en la transición. Las cartas se agotan a medida que se suceden las alternancias y no resulta evidente quién sería el heredero natural del liderazgo partidario, lo que convierte las primarias en un mecanismo aceptable para el conjunto de los jugadores. Varias terminan en un ejercicio ratificatorio sin suspenso, porque se inscribe una sola fórmula (por ejemplo, en 2019, en Argentina y Bolivia), o por la facilidad del triunfo. Otras son duramente disputadas, a veces tanto que se fisuran las organizaciones. A medida que las primarias se vuelven obligatorias, se relega la interrogante crucial de cuando eran facultativas, sobre si los partidos que las realizaban obtenían ventaja (Colomer, 2002: 117-135; Carey y Polga-Hecimovich, 2006: 530-543). De manera notoria, las primarias con estas características recargan la agenda de asuntos electorales, incrementan el costo de la política y probablemente refuerzan, como ha

sucedido en Estados Unidos (Zakaria, 2007), el peso de la notoriedad y la fortuna como factores decisivos de éxito.

En tercer lugar, las elecciones del periodo se celebraron en un ambiente de hondo malestar con la democracia y, más allá, con la situación misma de los países. Desde 2013-2015, los indicadores se desplomaron a los mínimos históricos del último cuarto de siglo (desde que las encuestas comparan a los países de forma anual o bianual, en particular, Latinobarómetro y LA-POP). A modo de ejemplo, entre 2018-2019 se tocó piso en la percepción de progreso; la satisfacción con la economía; el apoyo y la satisfacción con la democracia (Latinobarómetro 2021).

Esas inquietudes dan paso al cuarto rasgo saliente. La participación electoral continúa declinando, aunque sin caídas abruptas. La década de 2010 ha sido la de menor concurrencia, apenas por encima de 70%, ocho puntos por debajo de la fase 1985-1989 (Romero Ballivián, 2021: 50-51). Los modelos políticos y económicos se han desgastado. La corriente nacional popular, al menos en su variante clásica, no sobrevivió a la crisis económica simultánea al retorno a la democracia, tanto más que sus líderes concluyeron sus largas carreras. El liberalismo no satisfizo todas las expectativas de modernización, aunque guarda solidez para disputar las alternancias con la izquierda, en tanto que esta corriente retrocedió cuando concluyó la gran expansión económica y los escándalos de corrupción acorralaron a dirigentes emblemáticos.

Muchos votantes se desilusionan con la rotación de líderes, partidos, ideologías, esperan poco de los gobiernos y acogen escépticos el cambio de las gestiones. El desasosiego y la baja participación se vinculan con el quinto rasgo: la llegada de nuevas agendas al campo político y a las campañas electorales. Ciertamente, la económica permanece relevante y explica, en parte, el retorno liberal cuando se erosionó el crédito de la izquierda. A la par, emergieron la ética y la de reacción cultural. Por supuesto, en las campañas concretas estos factores pueden mezclarse, por lo que conviene distinguirlos conceptualmente.

La agenda ética giró alrededor de la honestidad y la lucha contra la corrupción. A lo largo de la historia latinoamericana numerosos dirigentes enarbolaban la honestidad como carta de presentación. La novedad vino de la exigencia simultánea en muchos países de que la renovación moral y la eliminación de la corrupción fueran la prioridad en la agenda pública y un determinante clave del voto. Propició el éxito de los outsiders que se presentaron como ajenos a los circuitos habituales de poder y prometieron barrer una corrupción e impunidad denunciadas y percibidas como sistémicas, mediante la destitución de autoridades sospechadas, el encarcelamiento

de los culpables, la elevación de penas y el recorte de privilegios —juzgados como un componente suplementario del malgasto— (incluso, algunos aventuraron mutilaciones o la pena capital para los corruptos. El enfoque justiciero prevaleció sobre la creación de mecanismos institucionales de fiscalización, menos llamativos para el electorado).

Sobre esos sentimientos cabalgaron los candidatos que rompieron los esquemas partidistas desgastados ante la opinión pública. Provinieron de líneas ideológicas diversas. Jimmy Morales en Guatemala en 2015 quebró la costumbre de que el segundo de la elección precedente ganara y se impuso de manera paradójica, con una candidatura ataviada con novedades, pero apoyada sobre fuerzas hostiles a la agenda de renovación moral —como ilustró su choque frontal contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG—. En México, López Obrador se asentó con la denuncia de la corrupción y la promesa de la austeridad republicana. Casi tres décadas del bipartidismo ARENA-FMLN se redujeron a añicos con la victoria de Bukele en El Salvador en 2019. De igual modo, Bolsonaro acomodó el choque entre el PT y la centro —derecha que progresivamente estructuró la política en Brasil (Santos y Tanscheit, 2019: 151-186)—. La fuerza de estas candidaturas destrozó sistemas partidarios que daban la impresión de solidez.

En cambio, la agenda de la reacción cultural tuvo mínimos antecedentes cercanos. Se construyó contra el “liberalismo cultural”, un conjunto de actitudes, comportamientos y medidas que cuestionaron ciertas costumbres y pautas de la moral sexual convencional y de la autoridad tradicional, en nombre de la autonomía del individuo y su derecho a una plena realización (Schweisguth, 2006). Esa sensibilidad marcó las evoluciones políticas y culturales de las sociedades desarrolladas en la onda de choque larga de los eventos de 1968, antes de ser acogida en los rangos juveniles y de alta educación de las capas medias y favorecidas de América Latina. Las reivindicaciones del feminismo en el campo político, profesional y sexual incluyendo el aborto; la laicidad; el pluralismo cultural; el matrimonio homosexual; los derechos de la comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero; la educación sexual en las escuelas, constituyeron elementos frecuentes de la agenda del liberalismo cultural. Si bien parte de una vertiente distinta se emparentó con la sensibilidad ecológica pues varios grupos sociopolíticos los impulsaron simultáneamente.

La adopción de las primeras medidas públicas en esa dirección, o simplemente la apertura del debate sobre ellas, provocó una movilización de rechazo que halló eco. Tomando como referencia la situación norteamericana, antes que la europea, probablemente más secular, hubo llamados

a plantear una “batalla cultural” que diera agenda a una “nueva derecha” (Laje, 2022). El énfasis en los valores tradicionales propulsó el ascenso de candidaturas de defensa del orden convencional alrededor de la denuncia de la “ideología de género”, el “marxismo cultural”, la defensa de la familia heterosexual o “natural” y, en trasfondo, la religión —más que de la Iglesia, sobre todo porque el impulso, las redes y los liderazgos fueron primero más evangélicos que católicos—.

Pocas candidaturas fueron marcadas, sino explícitamente, religiosas. Si se deja de lado a las formaciones demócrata-cristianas, de antigua presencia, los partidos de base confesional emergieron al final del siglo XX. Acompañaron la consolidación y expansión de las iglesias evangélicas que, de una actitud de retiro del mundo, pasaron al voluntarismo de plasmar su visión en la esfera pública (Pérez Guadalupe, 2017). Evocaron rasgos de los partidos “neoclericales” escandinavos o de la derecha religiosa republicana en Estados Unidos, opuestos a los compromisos sobre las “cuestiones de sociedad” y más prestos a afirmar su identidad que la democracia-cristiana (Seiler, 2003: 79-81).

Su discreto rendimiento electoral confirmó que una candidatura evangélica no atrae automática y masivamente el voto de los prosélitos (Pérez Guadalupe, 2020: 1-29). Ciertamente, ese movimiento logró una presencia parlamentaria sostenida en Brasil o Colombia (Velasco, Torres y Burgos 2018: 277-281; Lacerda, 2020: 257-270). Algunos descollaron al calor de coyunturas especiales. En Costa Rica, el pastor Fabricio Alvarado del Partido de Restauración Nacional (PRN) ganó la primera vuelta presidencial en 2018. Su baja intención de voto se disparó después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció favorablemente sobre el matrimonio homosexual ante una consulta de Costa Rica (Zúñiga, 2018: 272-276). Cayó derrotado en la ronda decisiva ante una alianza que, de la izquierda a la derecha, defendió un enfoque laico de la vida social.

Más común fue que las candidaturas, sin partir de una base explícitamente religiosa, recogieran esas aspiraciones o forjaran alianzas con sectores evangélicos y movimientos conservadores. Tales entendimientos resultaron decisivos para los triunfos del “No” en el referéndum sobre el acuerdo de paz en Colombia en 2016 (Velasco, Torres y Burgos, 2018: 281-282), de Hernández en Honduras o de Bolsonaro en Brasil, donde el enraizamiento evangélico es potente en la arena legislativa, local e impacta sobre los discursos aceptables en la escena pública (Oualalou, 2018; Campos Machado, 2020: 271-286). El afianzamiento en el ámbito presidencial tuvo un correlato, de menor envergadura, en las listas parlamentarias. Aunque lo habitual fue el anclaje en la derecha, hubo excepciones, más dictadas por

consideraciones de táctica electoral que de realineamiento ideológico, como la integración del evangélico Partido Esperanza Social (PES) en la coalición de López Obrador en México en 2018 (Garma, 2019: 41-44).

La agenda ética como la de la reacción moral revelan transformaciones de las sociedades latinoamericanas. La primera fue enarbolada por las capas medias urbanas extendidas, en especial en los segmentos juveniles. Sugiere el fortalecimiento de valores post-materialistas, es decir desvinculados de las luchas por los salarios, el reparto de la riqueza, la propiedad de los medios de producción, entre otros. La “transición cultural”, iniciada en las economías avanzadas, poseyó allí también la impronta de las cohortes juveniles (Inglehart, 1993). Su movilización electoral se ha dado, en numerosas oportunidades, al margen de estructuras partidarias consolidadas. La agenda de la reacción moral se sitúa igualmente fuera de la lógica económica, lo que le permite cortes transversales en la sociedad, incluyendo sectores populares, como ocurrió en 2019 en Bolivia, donde la candidatura del pastor Chi penetró en las comunidades del altiplano en desmedro del MAS (Romero Ballivián, 2022: 38-39). Posee un rasgo paradójico: moviliza a grupos numerosos alrededor de situaciones estadísticamente marginales (por ejemplo, el matrimonio homosexual o la identidad de personas trans), aunque, de alto impacto simbólico.

El sexto rasgo del periodo es la desaparición de Venezuela como referencia en las campañas. Tras más de una década de haber polarizado y convertido a numerosos comicios en el termómetro de los avances o los retrocesos de su causa, Venezuela dejó de ser un polo estructurador para las fuerzas políticas. Su influencia se contrajo de manera inversamente proporcional al agravamiento de la crisis socioeconómica, política y migratoria, y la evaporación de los medios para sostener una red de movimientos aliados. Ningún candidato relevante reivindicó cercanía con esa línea; la descalificación del adversario como “chavista” permaneció (por ejemplo, contra Petro en Colombia en 2018, sin duda por la importancia de la relación con Venezuela, la de mayor relevancia para ese país en Sudamérica (Pizarro, 2018: 13-23). Sin embargo, el impacto de esas acusaciones decayó entre los votantes. La consecuencia fue la progresiva renacionalización de los contextos de campaña.

Por último, los formatos de campañas cambiaron de manera significativa. Durante la transición a la democracia las campañas se sostuvieron sobre las estructuras partidarias, las giras de los candidatos, las concentraciones en espacios públicos, el despliegue de militancias para convencer a los votantes, las alianzas estructurales con grupos organizados (sindicatos, gremios profesionales, entre otros). Por supuesto, esas acciones todavía continúan,

con un valor estratégico disminuido. El final del siglo XX correspondió al ascenso de la televisión como el espacio central de las campañas que, a su vez, se profesionalizaron con la llegada de las encuestas y de expertos, que asesoran de un país al otro. Los costos de las campañas probablemente se incrementaron, en todo caso, se centralizaron en las direcciones nacionales y los recursos se destinaron principalmente a los medios audiovisuales. El papel —y los recursos— de la militancia se achicó.

Alrededor del tercer lustro del siglo XXI, surgió otra arena: las redes sociales virtuales, a medida que el Internet se convirtió en una tecnología cotidiana utilizada por poblaciones cada vez más amplias, al menos en las ciudades. Las anteriores tácticas de campaña no desaparecieron, pero cedieron influencia. Algunos candidatos armaron sus campañas por medio del Internet, saltándose el papel intermediario de los medios de comunicación e incluso de las estructuras partidarias, para llegar directo al electorado. Dirigente en un partido marginal, Bolsonaro construyó su notoriedad en YouTube (Fischer y Taub, 2019: 1-5) y durante la campaña tuvo mínima presencia publicitaria en los medios audiovisuales. Por su parte, Bukele, que recién logró participar con el tercer partido en el que registró su candidatura en 2019, también desplegó lo esencial de su campaña mediante las redes sociales y desplazó a un bipartidismo que parecía sólido.

Las redes favorecieron la difusión de mensajes segmentados con precisión a costos notablemente bajos, al menos en comparación con la pauta publicitaria. Al mismo tiempo, reforzaron la primacía del candidato sobre la organización política al generarle un vínculo directo con la población. Multiplicaron y descentralizaron los escenarios políticos, fracturando la preeminencia que, hasta entonces, tuvieron los medios de comunicación tradicionales y las instituciones. De manera simultánea, permitieron la proliferación de noticias falsas, difamaciones o acosos digitales que circularon de manera instantánea, con capacidad de llegada a círculos amplios, aunque muchos funcionando como burbujas de creencias y convicciones. Sometieron a las campañas a niveles de estrés desconocidos y al elector a la intrincada tarea de separar la verdad de lo falso —en caso de que tuviera la voluntad de hacerlo—.

Una mención final y aparte requiere la derrota de Macri en la presidencial argentina de 2019. Por primera vez en el siglo XXI desde la no reelección de Hipólito Mejía en República Dominicana en 2004, un presidente fracasó en continuar en el poder. Al igual que su colega dominicano, Macri fue vencido en medio de una crisis seria, con un cóctel de decrecimiento, inflación, aumento de la pobreza, el endeudamiento externo y las desilusiones. Anunciaba la llegada de un nuevo ciclo.

III. LOS PREÁMBULOS DEL CICLO ELECTORAL Y LOS REAJUSTES DEL CALENDARIO

1. *Un ciclo electoral en un ambiente deteriorado y caldeado*

El ciclo electoral que se abre en 2020 se sitúa bajo la sombra de la pandemia por numerosas razones, que exceden el impacto sanitario. Justamente porque las consecuencias no se limitan a la (dramática) contabilidad de contagios, hospitalizaciones o decesos en las sucesivas olas, concierne el periodo que se extiende de 2020, cuando llega a América Latina, hasta 2023 y más allá, cuando ya la mayoría de la población fue vacunada, las restricciones formaron parte de un repertorio pasado y la vida social recuperó su aspecto previo a la enfermedad.

Este abordaje se justifica por el impacto de la pandemia sobre todas las áreas de la sociedad, siendo, las más relevantes para este estudio, las económicas, sociales y políticas. El desequilibrio económico fue de un alcance inusitado, con el mayor desplome latinoamericano y mundial en un siglo. En 2020, la economía mundial se contrajo en un 3% (Banco Mundial, 2022: 1). Ciertos sectores colapsaron, como el turismo. El comercio entre países se redujo. Se perdieron decenas de millones de empleos. El sector formal y empresarial quedó atenazado entre la obligación de cubrir las planillas y una actividad reducida, a veces a niveles mínimos (Bárcena, 2021: 62-87). Los gobiernos latinoamericanos procuraron paliar los efectos de la parálisis por medio de la inyección de recursos, sobre todo para el consumo.

El rebote económico en 2021, a medida que se descomprimieron las restricciones, las fronteras se reabrieron, las cadenas de producción se rearticularon y las sociedades expresaron su voluntad de cerrar una época traumática, no constituyó el cierre de un paréntesis. La recuperación fue desigual, entre países, como entre sectores; una fracción de los empleos se perdió definitivamente, otros no se crearon, penalizando sobre todo a los jóvenes que aspiraban a insertarse. La incipiente alza de la economía mundial se frenó con la invasión de Rusia a Ucrania (2022). Resurgió la inflación, una sombra que parecía un recuerdo histórico —salvo en Venezuela y Argentina— y el aprovisionamiento de productos esenciales como los hidrocarburos y los cereales atravesó una fase crítica.

El daño social fue de igual magnitud. La pobreza mundial aumentó por primera vez en una generación (Banco Mundial, 2022: 1). La situación de los sectores vulnerables se degradó; grupos que accedieron recientemente a los estratos medios sintieron la amenaza del retroceso. Otros daños se

sentirán por largo plazo, como deserciones escolares definitivas como consecuencia de las escuelas cerradas, retroceso sanitario por la ausencia del acceso a los servicios o las vacunas infantiles, indocumentación por la atención suspendida, etcétera. La precarización se extendió y los más perjudicados fueron siempre los grupos en la base. Las sociedades sufrieron y el impacto se sintió hasta en la salud mental.

El corolario fue el desgaste acelerado de los gobiernos. En un primer y pasajero momento de la pandemia, la popularidad mejoró, como reflejo de un movimiento de cohesión nacional ante una amenaza nueva, desconocida y mortal; de alguna manera, como ocurre en el estallido de las guerras. En República Dominicana se propuso conformar un gabinete de unidad nacional, pero el gobierno no dio curso al planteamiento (Pérez y Rubiera, 2020: 308) Luego, la misma duración de la pandemia erosionó esa unidad (Sosa-Villagarcía y Hurtado, 2021: 71-91). Las medidas se criticaron, según las áreas, por insuficientes o por excesivas, se sospechó de las intenciones gubernamentales; la caída económica y social agotó la paciencia de la población, peor si ocurrieron escándalos, de corrupción o de acceso privilegiado a las primeras vacunas. Las instituciones se juzgaron desfasadas o incompetentes para encarar las aristas de la crisis multiforme.

Este deterioro ocurrió en una fase descendente de la confianza ciudadana en la democracia, sus actores, reglas e instituciones. Los valores en esa materia habían marcado mínimos en las últimas décadas, tal como exhibían las encuestas previas a 2020. Los datos recogidos en la pandemia indicaron que la tendencia se mantuvo. Los datos del Latinobarómetro de 2020 ilustran la situación. El apoyo a la democracia quedó en 49%, por debajo del 50% o más que había obtenido desde 1995 hasta 2018; la insatisfacción con ella llegó a 70%. La sensación de que se vive en una democracia con grandes problemas alcanzó 45% y sólo una minoría cree que se gobierna a favor del pueblo. La indiferencia ante el tipo de régimen —democrático o autoritario— volvió a situarse por encima de 25% y el apoyo a un gobierno militar en caso de dificultades estableció el récord de 31%. En consonancia, creció la tolerancia para que el gobierno se comporte autoritariamente en la medida que resuelva problemas. Los jóvenes registraron el menor apego a la democracia.

Las opiniones críticas volcaron a la gente a las calles. A menudo, las protestas estallaron contra una medida específica, pero la movilización se amplió a medida que se agregaban sectores disconformes, hasta poner en tela de juicio el funcionamiento del Estado o de la sociedad. Varias de esas movilizaciones carecieron de un centro político o social unificado, menos de un liderazgo personificado. Se activaron y prosiguieron gracias a coordi-

naciones por medio de las redes sociales. En general, rechazaron cualquier intento de los partidos o de actores institucionales de hablar en su nombre, lo que también complicó a las autoridades para encontrar interlocutores representativos. Las respuestas estatales variaron, pero, a menudo, quedó un saldo cruento y un Estado cuestionado.

Algunas de las manifestaciones estallaron poco antes de la pandemia, en las postrimerías de 2019. En la habitualmente tranquila Costa Rica, los sindicatos confrontaron al Estado por la reforma fiscal. En Ecuador, se produjeron contra la austeridad, en particular la eliminación de la subvención a los carburantes, decidida por el gobierno de Moreno y tuvieron como protagonistas a los indígenas. En Chile, la chispa fue la subida del precio de los pasajes de metro y hubo un nítido rostro juvenil. La salida precipitada hallada por la institucionalidad fue un plebiscito para decidir la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Si bien las mismas restricciones que impuso la pandemia limitaron la movilización social, en varios países, las personas siguieron desafiando al Estado en las calles. En Colombia, la agitación comenzó antes de la pandemia, pero se reactivó con una presencia intensa de sectores populares urbanos. En 2022, Panamá vivió su ola más crítica de movilizaciones del periodo democrático.

2. Desajustes de calendario y reorganización de la jornada de votación

En ese telón de fondo, inicia el ciclo electoral de la pandemia. Antes de analizar sus rasgos políticos, es indispensable apuntar dos características de los comicios de ese periodo por su singularidad histórica. Por un lado, la pandemia produjo una ola de postergación de las elecciones, que no fue exclusiva de América Latina. Por otro lado, el conjunto de las actividades electorales requirió un rediseño para encarar el desafío de la pandemia.

De manera excepcional, a partir de marzo de 2020, todas las elecciones latinoamericanas de ese año se aplazaron, como consecuencia de los confinamientos y restricciones en la actividad social y en tanto se tuviera claridad y certeza sobre cómo organizarlas de manera segura. Se retrasaron las presidenciales de República Dominicana y Bolivia, también comicios municipales o locales (Uruguay, Brasil, México y Paraguay, que los postergó un año) y el referéndum sobre la Constituyente chilena (Pinillos et al., 2022).

El aplazamiento osciló entre dos meses (República Dominicana) y, más frecuentemente, alrededor de un semestre. Independientemente del lapso, el reacomodo de las fechas fue delicado, pues, a menudo, los mandatos de

las autoridades tienen límites explícitos, a veces de rango constitucional. En la mayoría de los casos, la decisión se consiguió en un cierto consenso político e institucional para introducir los ajustes constitucionales o legales pertinentes, excepto en el caso boliviano, donde se produjo en una crispación severa que incluyó varias prórrogas y puso en entredicho la posibilidad misma de la celebración de los comicios (Bellot, 2021: 113-142).

Por otro lado, los organismos electorales debieron rediseñar cada paso logístico para prevenir que las actividades, que movilizan millones de personas se conviertan en focos de propagación del virus (Instituto Nacional Electoral; Centro de Asesoría de Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2020). En efecto, aun antes de la jornada de votación se necesitaban medidas de seguridad sanitaria en la capacitación de los miembros de mesa, la distribución del material, entre otros. Para el domingo electoral, se repartió material de protección (mascarillas, alcohol en gel, entre otros), se estableció distancias mínimas entre votantes, garantizó espacios con ventilación suficiente, lo que se acompañó de la creación de más recintos de votación y, a veces, la segmentación de horarios para distribuir el flujo de votantes. Destacó la capacidad de los organismos para incorporar con eficiencia las innovaciones en plazos breves. Los resultados dejaron evidencia de que las jornadas electorales no inciden negativamente en la evolución de los contagios del coronavirus.

Las pruebas superadas en 2020 resultaron una lección decisiva para que en 2021 los sistemas políticos opten por mantener las fechas de los procesos y ahorrarse el malabarismo de jugar con los plazos de los mandatos. Salvo un mínimo aplazamiento de semanas de la elección de constituyentes chilenos, ningún cronograma electoral se modificó por la pandemia.

IV. LAS TENDENCIAS POLÍTICAS Y ELECTORALES DEL CICLO ELECTORAL DE LA PANDEMIA (2020-2023)

En el ciclo electoral de la pandemia se identifican ocho tendencias políticas y electorales centrales: la disminución de la participación; las dificultades del oficialismo para defender su balance ante el electorado; la predominancia de la alternancia, sea hacia la izquierda o en favor de candidatos ajenos al sistema tradicional; los altos niveles de indecisión del electorado; la consolidación de nuevas agendas en el campo político; el agravamiento de la polarización; la consolidación de las redes sociales como espacio de campaña y un cuestionamiento de alcances inéditos a la institucionalidad electoral.

En el mundo, de febrero 2020 a febrero 2022, mermó la participación electoral. Se produjeron retrocesos en dos tercios de los casos (IDEA Internacional, 2021). América Latina no escapó a la tendencia global, por razones vinculadas con la enfermedad y por factores políticos. En realidad, se combinaron dos movimientos, la estabilidad de las cifras en la mayoría de los casos, con aumentos o descensos leves, y el récord de abstención en pocos, pero significativos casos. En Brasil disminuyó 0.6 puntos. Hubo incrementos modestos, +0.5 puntos en Bolivia, +0.6 en Chile, + 2 en Paraguay, +2.7 en Colombia, donde, sin embargo, estableció la marca más alta en más de cuatro décadas, incluso superada en la segunda ronda. El avance en Honduras (+11.1) debe ser considerado con precaución pues se asoció con la creación de un nuevo padrón, más moderno y seguro tecnológicamente, pero que no consiguió incorporar oportunamente a toda la población adulta.²

La pandemia tuvo un impacto general en la región. El temor al contagio disuadió a ciertas personas de asistir, por más que los organismos electorales ofrecieran garantías de cuidado. Es difícil precisar el peso de esa variable, pero, el sentido general de la evolución indica su importancia, que pudo modularse según valoraciones políticas. Una elección considerada poco atractiva en su oferta carecía de incentivos para vencer el temor del contagio.

En efecto, la variable política también pesa. Por un lado, el descenso de la participación no surgió con la pandemia, se inscribe en una línea de fondo: la década de 2010 fue la menos participativa desde 1985, subrayando la distancia de la ciudadanía con los actores políticos y las instituciones (Romero Ballivián, 2021: 50). El deterioro de algunos sistemas políticos y la fragmentación partidaria se hizo aún más evidente e impulsó la abstención. Perú fue un caso extremo de la crisis: desde la presidencial anterior, en 2016, se sucedieron cuatro presidentes, se disolvió el Congreso y se organizó un referéndum sobre reformas políticas. La oferta de candidaturas en 2021 no entusiasmó a una población apática y escéptica, como mostró la atonía de las cifras de apoyo en las encuestas. Los candidatos que llegaron a la segunda vuelta no concentraron juntos ni un tercio de los sufragios (Muñoz, 2021: 283-305).

La segunda tendencia fue el descalabro del oficialismo. Los efectos de la pandemia aceleraron y acentuaron el palpable descontento en América Latina con el rendimiento de la política, la sociedad, la economía. Los

² El rasgo saliente fue el récord de menor concurrencia a las urnas desde el inicio de la transición en República Dominicana (-14.4 puntos y 55.2% de participación) Perú (-12.9 puntos y 70%) y Costa Rica (-5.6 puntos y 60%).

gobiernos constituyeron el chivo expiatorio de las fallas estructurales y los daños multiformes de la pandemia —sin ignorar, por supuesto, sus yerros y el efecto corrosivo de escándalos de corrupción en la compra de productos o servicios vinculados con la enfermedad o en el acceso privilegiado a las vacunas—.

El oficialismo perdió en todos los comicios presidenciales, salvo dos excepciones. En Paraguay en 2023, el triunfo de Santiago Peña del oficialista Partido Colorado implicó la séptima victoria en ocho justas, un hito del que ningún otro partido latinoamericano puede jactarse. En ese sentido, fue simultáneamente excepcional y rutinario para un partido de rasgos predominantes ante su tradicional adversario liberal, en uno de los últimos bipartidismos históricos vigentes en la región (Filártiga, 2016: 193-233). En Nicaragua en 2021, fue la elección la que perdió cualquier atributo democrático y Ortega se reeligió luego de encarcelar o exiliar a cualquier adversario de riesgo. De este modo, en casi todos los países con elecciones en 2020 y 2023, la popularidad presidencial se situaba en niveles mínimos en 2020: en Bolivia, Añez, 21%; en Honduras, Hernández, 18%; en Chile, Piñera, 15%; en Costa Rica, Alvarado 14% y en Ecuador, Moreno, 9%. Esos guarismos correspondieron a los más bajos en el siglo XXI (Latinobarómetro, 2021: 48).

La extrema debilidad gubernamental tuvo diversas manifestaciones, siendo la primera la decisión del presidente de no competir. En Bolivia, cuesta abajo en las encuestas, Añez retiró su candidatura y pidió frenar el regreso del MAS al poder. En Ecuador, Moreno desistió de entrada, igual que Fernández en Argentina. En un contexto polémico, también se abstuvo el hondureño Juan O. Hernández, que había roto el candado de la prohibición de la reelección en 2017, pero se encontraba debilitado y acorralado, tanto interna como externamente. Otra forma fue la ausencia del partido oficialista en la papeleta. En Colombia, Iván Zuluaga, designado por el Centro Democrático (CD), desistió de continuar tras la celebración de las primarias, en las cuales no participó, y allanó el camino para otro candidato de la derecha, Federico Gutiérrez. Luego, de forma más sonada, cuando el presidente buscó la reelección, la perdió. Si la tasa de éxito en esa operación superaba el 90% en América Latina, las nuevas condiciones cobraron factura. Bolsonaro se convirtió en el primer presidente brasileño que fracasó y, frente a ese dato inédito, pesó poco que cayese superado por un margen estrecho en la segunda ronda.

Cuando el partido oficialista compitió, los resultados fueron entre malos y pésimos. En Costa Rica, el Partido Acción Ciudadana (PAC) se desplomó a 0.6% y quedó sin bancada parlamentaria (Ovares, 2022: 260). En Chile, la coalición gubernamental terminó cuarta (12.7%), con un candidato,

Sebastián Sichel, que ganó la primaria en calidad de independiente. El oficialismo se mantuvo competitivo y ocupó el segundo lugar en República Dominicana y Honduras, donde, aun así, las derrotas pusieron fin al largo dominio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Nacional (PN) respectivamente. En el país insular, el efecto de la pandemia, sentida apenas un par de meses antes de los comicios, fue, sin duda, menor que el desgaste de cuatro gestiones sucesivas, agravado por la ruptura del PLD tras su primaria, cuando su mayor referente del siglo XXI, Leonel Fernández abandonó la organización.

La contracara fue el triunfo de la oposición, que marcó la tercera tendencia, con dos variantes: el retorno del péndulo a la izquierda y el éxito de líderes externos al sistema de partidos tradicional; eventualmente, las dos pudieron combinarse en una candidatura. El primer movimiento se produjo a contramano de la llegada de la derecha al poder a partir del tercer lustro, cuando la izquierda había sufrido el final de la década económicamente propicia. La principal excepción la dio Guillermo Lasso en Ecuador, figura de la banca y promotor de una visión liberal de la economía. Coronó con éxito su tercer intento, a pesar de que cosechó su apoyo más bajo en la primera vuelta y tuvo que remontar una diferencia importante para ganar en la segunda (Bustamante y Medina, 2021: 148-149). Aunque Moreno rompió con Correa y condujo una política distante del expresidente, fue la primera vez desde 2006 que, en las urnas, el electorado optó por un candidato opuesto al movimiento de Correa. En menor medida, por su perfil de menor carga ideológica, también pertenece a esa corriente Luis Abinader, ganador de la presidencial dominicana en 2020.

El escenario para las organizaciones conservadoras para mantener el gobierno fue malo pues la situación económica empeoró y se complicó con la pandemia. En ese sentido, el paso por el gobierno se redujo, en general, a una sola gestión. Con viento favorable, la izquierda retornó. En Bolivia, el MAS regresó tras haber sido desalojado del gobierno por la crisis postelectoral de 2019, cerrando el paréntesis del régimen transitorio de Añez, con promesas que evocaban la prosperidad y estabilidad de los lustros que gobernó. El perfil del candidato Luis Arce, ministro de economía de Morales, apuntalaba ese mensaje. En 2022, en Brasil, la coalición alrededor del Partido de los Trabajadores (PT) y de Lula reanudó su historia de éxito electoral (cinco triunfos en seis presidenciales en el siglo XXI).

Asimismo, llegaron formaciones de izquierda que no habían gobernado. Pedro Castillo, candidato de Perú Posible, un partido de izquierda hasta entonces marginal ingresó inesperadamente a la segunda vuelta, en la cual aventajó por mínimo margen a Keiko Fujimori. En Honduras, se impuso

Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, y primera mujer en acceder al cargo. Abanderó a Libre, escisión del centenario Partido Liberal, organizado luego del derrocamiento de su esposo. Su llegada consumó el final del bipartidismo tradicional, tanto más que lo hizo en alianza con Salvador Nasralla, un popular presentador de televisión, y respaldada por movimientos sociales de izquierda. En Chile, concluyó igualmente la alternancia entre las fuerzas de la antigua Concertación y de la derecha que marcó las primeras tres décadas de la democracia. Ganó Gabriel Boric, proveniente de la izquierda estudiantil, distante del histórico Partido Socialista, y se convirtió en el presidente más joven del país.

El éxito de los *outsiders*, visible ya antes de la pandemia, se confirmó y se consolidó. Personas con cortas trayectorias políticas, desconocidas para la mayoría del electorado al inicio de las campañas, desprovistas de implantación, al mando de siglas con poca historia socavaron sistemas partidarios, unos visiblemente frágiles, otros, en apariencia, sólidos. Castillo, maestro rural de la sierra, con escasa trayectoria, pasó en algo más de un mes del anonimato a la segunda vuelta. encabezar las encuestas y logró un apretado triunfo sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Un poco conocido Boric venció en la segunda vuelta a José Antonio Kast, en la otra punta política, pero, igualmente alejado de los emblemas tradicionales. El costarricense Rodrigo Chaves, de fugaz trayectoria pública, ganó en la ronda decisiva a José Manuel Figueres, básicamente contraponiéndose como el hombre nuevo frente al adalid del antiguo sistema político.

El *outsider* no proviene exclusivamente de un campo ideológico ni todos llegan necesariamente para sacudir los cimientos del orden establecido, si bien todos comparten la promesa de un nuevo momento o, al menos, de ser distintos de un statu quo que ya no despierta ilusiones o de una elite política descrita como corrompida y ajena a las preocupaciones y sufrimientos de la comunidad nacional.

El caso colombiano ilustró el entrecruzamiento de estas múltiples líneas de fuerza en una sola elección. En 2022, en su tercer intento, el candidato de izquierda Gustavo Petro consiguió su mejor resultado en la primera vuelta y se impuso en la segunda. Integró la dupla con Francia Márquez, afrocolombiana de los sectores más excluidos de la sociedad. El binomio recogió el rechazo a la gestión gubernamental de Duque y la aspiración al cambio social, consiguiendo el primer gobierno de izquierda, un viraje de dimensiones históricas. Derrotó en la segunda vuelta a Rodolfo Hernández, un candidato que se colocó, de manera aún más contundente, como la figura antisistema, sin pertenecer a la izquierda.

La tercera tendencia es la notoria indecisión del electorado hasta poco antes de la jornada. En realidad, esa figura aplica a aproximadamente la mitad de los casos. En la otra mitad, los dos primeros lugares estaban fuera de discusión desde el inicio de la campaña, aunque, por supuesto, pudiese haber dudas sobre el ganador o la correlación final de fuerzas. Se anticipaban los duelos entre Luís Abinader y Gonzalo Castillo en República Dominicana, Luís Arce y Carlos Mesa en Bolivia, Xiomara Castro y Nasry Asfura en Honduras, Lula da Silva y Jair Bolsonaro en Brasil o Santiago Peña y Efraín Alegre en Paraguay.

En cambio, la apatía y el escepticismo del electorado ante la oferta se sintió en otros países. A meses, incluso semanas de la presidencial, las encuestas mostraban una alta dispersión de las intenciones de voto, bajas y oscilantes preferencias, por lo que varios candidatos podían ser los finalistas. El rasgo ganó visibilidad en sistemas partidarios descompuestos. En el desorganizado, volátil e imprevisible sistema de partidos de Perú, casi cualquier resultado era posible, pues, a semanas de los comicios, en las encuestas la incertidumbre “alcanzaba a los diez primeros puestos” (Incio, 2022: 373). En Costa Rica, el escenario era apenas mejor: “las preferencias se concentraban en seis opciones políticas, empero ninguna superaba el 20% de intención de voto” (Ovares, 2022: 261). En Colombia, Petro debió aguardar hasta la jornada electoral para conocer a su adversario de la segunda ronda y enfrentó a Hernández, de inesperado ascenso en la recta final. Por su parte, en Chile, el reacomodo a favor de Kast, inesperado ganador de la primera vuelta se produjo al final, después de partir de una base modesta.

La cuarta tendencia fue la recomposición de las agendas. Por un lado, se consolidó la agenda de reacción moral. Fuerzas conservadoras, antiguas o recientes, dejaron de enfatizar propuestas económicas, relegadas a los programas, poco rentables en un escenario de deterioro económico y escepticismo con las recetas liberales. Se recostaron sobre valores tradicionales, como la familia, el matrimonio, la religión, las costumbres nacionales e identificaron como enemigos la “ideología de género”, el matrimonio igualitario, el aborto o, en otras vertientes, lo “políticamente correcto” o el “globalismo”. Uno de los principales exponentes fue Bolsonaro que tejió alianzas explícitas con el movimiento evangélico, acusó a Lula de ser “abortista” e incluso lo forzó a tener que dirigir una carta abierta a esa corriente religiosa para defenderse. En Paraguay el conservador Partido Colorado incorporó la lucha contra la “ideología de género” como una de sus líneas discursivas importantes.

El surgimiento de esas propuestas se inscribió en un contexto social e internacional amplio. Fuera de la región, prosperaron movimientos de

esa índole, siendo paradigmática la remodelación del Partido Republicano bajo el liderazgo de Donald Trump (Levitsky y Ziblatt, 2020: 67-87), que se acompañó, como símbolo, de la revisión de la célebre sentencia *Roe vs. Wade* sobre el aborto por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos (2022). Asimismo, importantes actores adoptaron posturas conservadoras. La Iglesia católica, del progresismo social en el impulso del Concilio Vaticano II, retornó a la preservación de los valores tradicionales y entró en mayor sintonía política y cultural con el movimiento evangélico.

En el desplazamiento del péndulo hacia la izquierda que se dio en el ciclo presidencial de la pandemia, perdieron los candidatos que recalcaron esa línea proselitista, como Kast en Chile, Rafael López Aliaga en Perú y Fabricio Alvarado en Costa Rica (ambos terceros) pero la colocaron en el debate público. El apoyo les permitió mantener vigencia y cosechar éxitos pronto: López Aliaga ganó la alcaldía de Lima (2022), en tanto que el Partido Republicano de Kast triunfó en la segunda elección de constituyentes chilena (2023).

En paralelo, pero desde flancos contrapuestos, se promovieron agendas hasta entonces marginales y secundarias, asociadas con la ecología, la protección del medio ambiente o la limitación de actividades extractivas, o, en otra dimensión, la extensión de derechos, en especial de mujeres, minorías sexuales o grupos étnicos. La campaña de Yaku Pérez las combinó para rechazar tanto el liberalismo como la visión desarrollista y estatista de Correa; así rebasó el voto de enclave étnico, y cerca estuvo de alcanzar la segunda vuelta ecuatoriana en 2021 (Bustamante y Medina, 2021: 148-149). Sin constituir el centro de su planteamiento, en Honduras, Xiomara Castro multiplicó guiños hacia el movimiento feminista, de jóvenes, ecologistas, defensores de derechos humanos o artistas, que se aglutinaban en Libre (Salomón, 2022: 139). En Colombia, Petro prometió frenos a la extracción petrolera y la candidatura vicepresidencial de Márquez constituyó un símbolo de inclusión de segmentos históricamente relegados, tanto más que fue acompañado de mensajes fuertes.

La quinta línea fue la polarización exacerbada, en parte alimentada por las nuevas agendas que son menos de políticas públicas que de valores, principios e identidades. Las contiendas electorales son, por definición, eventos proclives al antagonismo, pues los postulantes enfatizan las diferencias para conquistar sufragios y subrayan los defectos programáticos o personales de los rivales. Esas disputas pugnaces no son suficientes para caracterizar unos comicios como polarizados.

Se requiere, adicionalmente, una presentación dramática de los temas de campaña que exceda las políticas públicas u orientaciones gubernamen-

tales para colocar en juego el “alma” o el “destino” de la nación y que la victoria o la derrota impliquen trayectorias sustancialmente distintas para el país, probablemente irreversibles. Asimismo, es indispensable que tal conceptualización resuene y despierte profundos sentimientos, vale decir que no sea sólo una retórica de líderes y partidos durante la campaña, sino que se ancle vívidamente en amplias capas del cuerpo social, por lo que sus efectos, perceptibles antes de la jornada de votación, continuarán aún después de proclamados resultados y ganadores, durante la nueva gestión. Sí, por último, esa línea de división se superpone de una manera relativamente estable con grupos sociales, regionales, étnicos o culturales, con identidades politizadas, la polarización no es sólo electoral y representa, más bien, un rasgo saliente de las sociedades que se acentúa a medida que se acerca la jornada de votación. Esas brechas generan ansiedad ante los resultados y desconfianzas prolongadas ante las acciones gubernamentales, con las consiguientes dificultades para un diálogo fluido entre los actores políticos, que sólo conseguirán acuerdos puntuales y esporádicos. Si a esos factores se suman resultados estrechos, las tensiones se recargan.

En América Latina, hubo fases de descompresión, cuando se perfilan acuerdos mayoritarios sobre el rumbo, y otras polarizadas. La época la pandemia correspondió a una de agudos antagonismos. Probablemente influyó el doble deterioro, económico y político, que reduce el espacio para posturas conciliadoras e incentiva confrontaciones más severas en las que se buscan culpables. En Bolivia, el posible retorno del MAS al poder caldeaba los ánimos, con dos campos que reivindicaban para sí la bandera de la democracia y acusaban al otro de autoritarismo (Romero Ballivián, 2022; Souverain; Exeni, 2022). En la campaña, las referencias al expresidente Morales fueron omnipresentes, en particular por parte de los detractores del MAS (Peña y Puente, 2022: 128-133). En Ecuador, asimismo, la disputa tuvo como un eje al ausente expresidente Rafael Correa, mientras se discutían formas de continuidad o de ruptura con su modelo. Igualmente, dramático fue el tono de la segunda vuelta peruana, en la cual Castillo fue descrito como una amenaza para la democracia y el libre mercado o, en palabras de Mario Vargas Llosa, como “la dictadura y el atraso”.

En Honduras, el oficialismo procuró reavivar la polarización política que viene desde la época del gobierno de Manuel Zelaya, pero no cuajó ante la voluntad de cerrar un periodo de tres gestiones consecutivas del Partido Nacional. En cambio, en Colombia, la posibilidad de la primera llegada de la izquierda al poder desató una campaña enconada, alrededor de proyectos presentados como antagónicos, y que involucró a sectores más allá de la política. En Brasil, se efectuaron caracterizaciones dramáticas: los

tenores del gobierno describieron al PT como amenaza contra la familia, los valores tradicionales y la libertad; en la izquierda, acusaron a Bolsonaro de autoritarismo y fascismo.

La sexta tendencia, empapada por la anterior, fue la oposición de territorios y grupos sociales, separados por visiones difíciles de compatibilizar y desigualdades estructurales, cuyos antecedentes hunden sus raíces en una muy larga historia latinoamericana. En Bolivia, Arce se impuso con el voto rural de tierras altas y de las periferias urbanas, mayoritariamente pobres y con identidad indígena. En cambio, sus adversarios obtuvieron el respaldo de las ciudades, las clases medias, y la región oriental, más próspera (Ortuño, 2022: 1-47; Romero Ballivián, 2022: 73-106). En Perú, Lima y su entorno, el empresariado, las clases favorecidas y medias, la región amazónica apostaron por Fujimori, pero perdieron ante el voto del sur y centro, andino, rural, pobre y de raigambre indígena, que se inclinó por Castillo, en una distribución territorial con antecedentes en comicios previos (Ayala, 2021: 303-326; Encinas y Fuentes, 2021: 231-282). En Ecuador, reemergió la tradicional fractura entre la costa, que apostó por Andrés Araúz, y Quito, que se inclinó por Lasso, quien, en la segunda vuelta, sumó el apoyo amazónico. Colombia, el triunfo de Petro unió Bogotá y la periferia pacífica, atlántica y amazónica contra el interior del país y a los sectores populares urbanos contra las elites. Con respecto a los casos precedentes, la singularidad fue que su alianza, el Pacto Histórico, consiguió la adhesión juvenil y de las capas medias urbanas. Esta pauta ha sido común en elecciones que han supuesto realineamientos significativos en América Latina. En Brasil, los prósperos estados del sur y las principales ciudades fueron proclives a la reelección de Bolsonaro; los abultados porcentajes del empobrecido y rural nordeste y norte permitieron la victoria de Lula.

En contraste, República Dominicana, Honduras y Paraguay muestran otra dinámica. Las victorias de Abinader, Castro y Peña se asentaron sobre una cobertura nacional, con triunfos en la mayoría de los departamentos, dejando sólo bolsones a sus contrincantes. En la isla caribeña, el PLD resistió en el occidente fronterizo con Haití; en Honduras, el Partido Nacional, en sus bastiones rurales occidentales. Los bajos indicadores de desarrollo humano de ambas áreas sugieren una cierta efectividad de las políticas asistencialistas ejecutadas desde las administraciones salientes.

La séptima tendencia fue la consolidación de las redes sociales como mecanismo decisivo en las campañas. Su vertiginoso ascenso se confirmó y aceleró, por un doble movimiento. Uno, de naturaleza coyuntural, vinculado con la pandemia: las movilizaciones y concentraciones masivas de personas quedaron limitadas, ya sea por regulaciones generales de las au-

toridades de salud, por disposiciones específicas de los órganos electorales o por autocontención de los partidos, entre las reticencias de la militancia a congregarse y el temor de los candidatos a la desaprobación social. Para compensar la ausencia en el terreno se invirtió más en los medios de comunicación tradicional o en las redes sociales.

El segundo movimiento fue estructural. Las redes sociales se han asentado en las sociedades latinoamericanas. Han desbordado los grupos iniciales, favorecidos y juveniles, para abarcar más capas, por un tiempo más prolongado, para usos crecientemente diversos y con una oferta diversificada. Para mantener el contacto con la población, se ha vuelto un imperativo para los candidatos exponer sus mensajes y exhibir su personalidad en ese espacio, de manera continua, con formatos adecuados a cada plataforma. Las redes se han convertido en un medio privilegiado del proselitismo; su manejo profesional se ha banalizado en los cuarteles generales de campaña. Si en Brasil en 2018, Bolsonaro sacó ventaja, en 2022, los principales actores llegaron alistados para el combate digital.

Los ciudadanos se han habituado a esa presencia. Al punto que ya ni siquiera necesitan que el candidato esté en el territorio. Revelador y extremo fue el caso de Franco Parisi, célebre por sus explicaciones económicas pedagógicas en redes digitales. Sin vivir en Chile, desarrolló su campaña por redes sociales, desde Estados Unidos. Suficiente para ocupar el tercer lugar en la elección de 2021. Las redes resultaron cruciales para Rodolfo Hernández en la presidencial colombiana de 2022, a la cual llegó siendo poco conocido. Uno de sus apodos, “el viejito de Tik Tok”, ilustra con creces uno de los vectores de su popularidad. También apuntalaron el ascenso de Paraguay Cubas hasta la tercera ubicación en los comicios paraguayos de 2023. Estos candidatos aventajaron a partidos con décadas de estructuras consolidadas y maquinarias reputadas por su capacidad de movilización, atrayendo, además, a sectores poco participativos y politizados.

Las redes también poseen fuertes y múltiples efectos en las campañas. Llevan al máximo la personalización de la política: el tuit o, aún más, el video en Tik Tok o Instagram giran alrededor de la personalidad, el estilo, los gustos y las ideas de la persona, no de una agrupación. Vuelven más residual el papel de las estructuras partidarias y permiten —eventualmente— esquivar a los medios de comunicación tradicionales u obligarlos a seguir agendas que se inician en las redes. Abren el abanico de oportunidades para el ingreso acelerado en el escenario público y político. A la par, facilitan campañas denigrantes contra líderes políticos o los procesos electorales, alimentadas por noticias falsas (muy anteriores a las redes, pero que hallan en ellas un megáfono para alcanzar de manera instantánea a grandes grupos con

costos mínimos). En ese sentido, tienden a generar burbujas de creencias y sentimientos compartidos que, muchas veces, empujan hacia la radicalización, por lo tanto, estimulan la polarización.

Con todo, la esfera digital no es necesariamente ni el reflejo de lo que sucede en una campaña ni el anticipo de un resultado electoral. La notoriedad no es sinónimo de popularidad, tampoco elevados apoyos presagian elevadas votaciones ni una posición desfavorable anuncia derrotas. Dejando de lado los bots que crean climas de opinión artificiales, el perfil de los usuarios es crucial para la interpretación no sesgada de los datos. Partidos con implantación rural o en sectores de bajos ingresos figurarán menos populares en las redes; candidatos fuertes en estratos socioeconómicos altos o juveniles pueden estar sobrerrepresentados en las interacciones de los internautas, etcétera. Posturas radicales promovidas a rajatabla pueden llevar la voz dominante, en especial si los opuestos se acogen a la “espiral del silencio” (Noelle-Neumann, 1984).

Por último, la institucionalidad electoral se ha convertido cada vez más frecuentemente en objeto de ataques sistemáticos y sostenidos durante todo el ciclo electoral. Sin duda, en las décadas precedentes, en distintos países, hubo críticas al desempeño de la autoridad electoral, en algunos casos, justificadas y probadas por el comportamiento parcializado de los organismos. De hecho, varios de esos reclamos incidieron decisivamente para un reajuste y fortalecimiento de la institucionalidad o de la normativa que redundó en un alza de los parámetros de integridad.

En los ataques de esta fase hay novedades. Se producen contra organismos que, de acuerdo con la opinión especializada, plasmada en los informes de las misiones de observación internacional, cumplen sus labores con rectitud, imparcialidad y solvencia técnica. Segundo, varias de las embestidas provienen de los gobiernos, cuando antes, las eventuales críticas nacían de la oposición o de la sociedad civil que denunciaban condiciones adversas para una alternancia. El cuestionamiento gubernamental alía fuerza política, institucional y mediática (por ejemplo, mayorías parlamentarias, poderes judiciales con escasa independencia, entre otros). Tercero, la retórica del “fraude” no requiere aportar evidencia, le basta, en el mejor de los casos, con alusiones a ejemplos dispersos de fallas menores, denuncias genéricas y vagas, referencias a sospechas y rumores; ni siquiera, necesita un resultado ajustado. Cuanto más polarizado sea el escenario, más probabilidades de que las acusaciones mellen la confianza en los resultados. Por último, como muchas denuncias circulan y se reproducen en redes sociales, pueden prescindir de líderes políticos repitiendo el mensaje en la primera línea.

En Brasil, Bolsonaro puso en duda las urnas electrónicas de votación que han funcionado durante décadas sin reportes de alteraciones, agravando el escenario de 2018, en el cual la “desinformación asumió un papel protagónico sin precedentes” (Tribunal Superior Eleitoral, 2022: 13). La peculiar composición del Tribunal Superior Electoral (TSE), adosada al Poder Judicial, le permitió frenar la ofensiva, aunque a costa de concesiones, como las revisiones informáticas a cargo de las Fuerzas Armadas. También sufrieron arremetidas de gran calado los organismos de Bolivia en 2020 y Perú en 2021, así como el mexicano, aunque sin vinculación específica con una elección presidencial. En Paraguay, la acusación de fraude se intensificó en la fase postelectoral.

El volumen de las denuncias desgasta la institucionalidad. Termina minando la confianza ciudadana en las instituciones, los procedimientos y, en última instancia, los resultados. Pocas instituciones, algunas con décadas de labrada reputación, consiguieron situarse al margen de la hojarasca, como el TSE de Costa Rica y los órganos electorales de Chile. En un punto aparte, el ciclo electoral de la pandemia mantuvo y agravó las elecciones alejadas de las normas mínimas de la democracia, en particular en Nicaragua en 2021. El deterioro de las condiciones, visible en las reelecciones previas de Ortega (2011, 2016), cayó otro peldaño inferior cuando el régimen persiguió, encarceló y exilió a los potenciales aspirantes opositores a la presidencia, incluida la principal figura, Cristiana Chamorro. Significativas voces opositoras también debieron dejar el país, como el novelista Sergio Ramírez que retrató la represión del movimiento juvenil de 2018 (Ramírez, 2020). El estilo represivo incluyó el acallamiento de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, así como el férreo control del Frente Sandinista de Liberación Nacional por parte de la familia de Ortega (Cuadra, 2022: 65-73). Decapitada la oposición mediante órganos judiciales y electorales sometidos, el gobierno colocó como rivales candidatos títeres y triunfó con 75%, ganado 83% de las diputaciones. El esquema recordó las elecciones fantoche de la familia Somoza, en medio de un creciente aislamiento internacional.

V. CONCLUSIONES:

¿LA DERROTA DE LOS VENCEDORES?

El ciclo electoral de la pandemia en América Latina se ha desarrollado en un tiempo de fuertes tensiones e incertidumbres democráticas, de sociedades descreídas con las instituciones, escépticas con las autoridades, hastiadas del

sistema político, preocupadas por el futuro económico, inquietas por rebrotes de contagio. En ese marco, las elecciones de la pandemia presentan rasgos paradójicos. Se celebraron en los ya descritos ambientes de incomodidad, pero las campañas tendieron a agravar las molestias, ahondar las divisiones y fracturas, acentuar la crispación. La polarización excede con creces la virulencia de las redes sociales. En los países andinos, aunque no exclusivamente en ellos, las urnas reflejan oposiciones sociales, territoriales, étnicas de larga data y que se cristalizan en las principales candidaturas. Cuando las disputas políticas se superponen a esas líneas de separación, la jornada electoral no apacigua las ansiedades o temores.

Asimismo, en varios casos, las denuncias de fraude, aun sin pruebas o indicios, de los partidos derrotados o de los adversarios de los triunfadores —no hay una superposición perfecta entre ambos— fueron creídas por sectores más o menos amplios de la sociedad y dejaron con un halo de sospecha el triunfo del presidente. El efecto más amplio fue que la elección cumplió sólo parcialmente algunas de sus funciones básicas en democracia. Sólo de manera fragmentada y difícil se produjo la aceptación de la sociedad de sus procesos y procedimientos de asignación del poder, las reconciliaciones después de las rivalidades propias de las campañas y el reconocimiento de la legitimidad de las autoridades.

El desgaste del mecanismo electoral en una sociedad se prolonga más allá de la elección en la cual fue cuestionado y traba y perturba la dinámica democrática. Se generan dudas sobre el instrumento central de las democracias por lo que, por primera vez desde la transición, la acumulación de procesos electorales no alimenta en sí misma el círculo virtuoso de confianza. De hecho, son los saldos de esa credibilidad que se gastan y colocan los siguientes ciclos electorales en una posición más vulnerable.

En otro ámbito, más político, en el ciclo de la pandemia, las elecciones sirvieron para un ajuste de cuentas con los gobernantes, que cargaron las culpas de una coyuntura adversa que desnudó falencias estructurales. El viento favoreció a los opositores, recién llegados o veteranos en las lides electorales, la mayoría de izquierda, porque los presidentes salientes eran de corrientes conservadoras. Sin embargo, rara vez, como en el caso de Petro en Colombia, esas olas venían impulsadas por un hálito de esperanza e ilusión. El motor de la alternancia fue la sanción al oficialismo y secundariamente el apoyo convencido a la fuerza de reemplazo, lo que explica el éxito de candidatos apenas conocidos al inicio de la campaña y la dispersión del voto.

La consecuencia fue un estado de gracia efímero para la mayoría de los presidentes, en coexistencia con congresos en los cuales excepcionalmente poseían mayoría. La corta paciencia de las sociedades contrajo los márgenes

nes de acción, peor todavía por la lenta recuperación económica previa a la pandemia y el surgimiento de nuevos problemas, en especial la inflación y la devaluación. Las victorias tuvieron un gusto pírrico. Al cabo de pocos meses, los nuevos presidentes enfrentaban escenarios difíciles, ya sea por una baja acelerada de la popularidad, acorralamiento institucional o movilizaciones. Ese cóctel se preparó de manera distinta en los países.

Los casos dramáticos ocurrieron en Perú y Ecuador. Castillo navegó en una gran precariedad institucional, rotando gabinetes, desprovisto de políticas públicas claras. Antes del año y medio de mandato, fue vacado por el Parlamento después de un fallido intento para disolverlo, en una maniobra que evocó el autogolpe de Fujimori dos décadas atrás (2022). Su vicepresidenta y sucesora Dina Boluarte asumió el mando con fragilidades similares y presiones para adelantar los comicios. Por su parte, Lasso tampoco pudo completar dos años de gestión. Ante el riesgo inminente de ser destituido por la Asamblea, activó el mecanismo conocido como “muerte cruzada”, que disuelve el congreso e implica una convocatoria inmediata a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias (2023). Sin estos extremos, Sin estos extremos, en Chile, Boric tuvo el desgaste más acelerado del inicio de una gestión en la opinión pública. Sufrió un revés con el masivo rechazo a la Constitución elaborada por la Constituyente (2022) y el triunfo del Partido Republicano en la segunda Asamblea Constituyente (2023).

En esas condiciones, las elecciones de la pandemia han arrastrado numerosas dificultades de un periodo agitado y turbio, que pudo recordar, por ciertos aspectos, la recesión e inflación de la década de 1980, así como la de principios del siglo XXI. Empero, esta fase sucede a una ya de por sí difícil para las sociedades y con escasas opciones claras de alternancia para el electorado. Si bien los procesos electorales conservan su papel fundamental como ejes ordenadores de la vida democrática, surge el inédito desafío de evitar que el capital hasta ahora acumulado sea tan severamente golpeado que ponga en entredicho la sostenibilidad de la pieza maestra de los regímenes democráticos latinoamericanos.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AYALA, Henry. 2021. “Elecciones generales Perú 2021: claves para diseccionar las elecciones del Bicentenario”. *Elecciones*, 20 (21): 303-326.
- BANCO MUNDIAL. 2022. *Finanzas al servicio de la recuperación equitativa*. Washington D.C.: Banco Mundial.

- BÁRCENA, Alicia. 2021. "Efectos socioeconómicos de la COVID-19 en América Latina y el Caribe y perspectivas de recuperación". *Pensamiento Iberoamericano* (1), 62-87.
- BELLOT, Carlos. 2021. "Análisis jurídico-constitucional de los hitos importantes en los procesos electorales extraordinarios 2020-2021 en Bolivia". En Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Democracia en vilo. La Paz: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 113-142.
- BRICEÑO, Héctor. 2023. "¿Qué tan distintos son los nuevos autoritarismos?". *LASA Forum*, 54(2), 6-14.
- BUSTAMANTE, Fernando y MEDINA, Pablo. 2021. "Ecuador, ¿qué significa el triunfo de Guillermo Lasso?". *Revista de Ciencia Política*, 59(2), 143-171.
- CAMPOS MACHADO, Maria. 2020. "A vertente evangélica do neoconservadorismo brasileiro". En PÉREZ GUADALUPE, José Luís y CARRANZA, Brenda (Orgs.). *Novo ativismo político no Brasil: os evangélicos do século XXI*. Rio de Janeiro, Konrad Adenauer Stiftung, 271-286.
- CAREY, John y POLGA-HECIMOVICH, John. 2006. "Primary Elections and Candidate Strength in Latin America". *The Journal of Politics*, 68(3), 530-543.
- COLOMER, Joseph. 2002. "Las elecciones primarias presidenciales en América Latina y sus consecuencias políticas". En CAVAROZZI, Marcelo y ABAL MEDINA, Juan (eds.). *El asedio a la política (los partidos latinoamericanos en la era neoliberal)*. Buenos Aires: Homo Sapiens, 117-135.
- CUADRA, Elvira. 2022. "Nicaragua: de proyecto revolucionario a dinastía autoritaria". *Nueva Sociedad*, (300): 65-73.
- ENCINAS, Daniel y FUENTES, Alejandra. 2021. "La geografía política de las elecciones presidenciales de 2021 en Perú". *Elecciones*, 20(22), 231-282.
- FILÁRTIGA, Camilo. 2016. "La estabilidad del sistema de partidos de Paraguay (1989-2015)". En Freidenberg, Flavia (ed.). Los sistemas de partidos en América Latina 1978-2015 (tomo I). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional Electoral, 193-233.
- FISCHER, Max y TAUB, Amanda (24 de agosto de 2016). "YouTube alimenta la derecha en Brasil". New York Times, Separata de La Razón, 1-5.
- FREIDENBERG, Flavia. 2016. "La reina de las reformas: las elecciones internas a las candidaturas presidenciales en América Latina". En FREIDENBERG, Flavia y MUÑOZ-POGOSSIAN, Betilde (eds.). *Reformas a las organizaciones de partidos en América Latina 1978-2015*. Lima: Pontificia Universidad Católica de Perú, Organización de los Estados Americanos y Sociedad Argentina de Análisis Político, 31-91.

- GARMA, Carlos. 2019. Religión y política en las elecciones del 2018 (evangélicos mexicanos y el Partido Encuentro Social”. *Alteridades*, 29(57), 35-46.
- HARARI, Yuval Noah. 2020. *Homo Deus (breve historia del mañana)*. Ciudad de México: Debate.
- IDEA INTERNACIONAL. 2021. *El Estado de la democracia en las Américas 2021 (democracia en tiempos de crisis)*. Estocolmo: IDEA Internacional.
- INCIO, José. 2022. “Elecciones generales peruanas 2021: fragmentación y debilidad democrática”. En TUESTA, Fernando (ed.). *Elecciones 2021 (pandemia, crisis y representación)*. Lima: Universidad Católica del Perú, 371-388.
- INGLEHART, Ronald. 1993. La transition culturelle dans les sociétés industrielles avancées. París: Económica.
- INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, Centro de Asesoría de Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2020. *El COVID-19 y las elecciones en América Latina*. Ciudad de México: INE y CAPEL-IIDH.
- LACERDA, Fabio. 2020. “Performances eleitorais dos evangélicos no Brasil”. En PÉREZ GUADALUPE, José Luis y CARRANZA, Brenda (Org.). *Novo ativismo político no Brasil: os evangélicos do século XXI*. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 257-270.
- LAJE, Agustín. 2022. *La batalla cultural (reflexiones críticas para una nueva derecha)*. México: Harper Collins.
- LATINOBARÓMETRO. 2021. Informe 2021 (adiós a Macondo). Santiago: Latinobarómetro.
- LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel. 2020. *Cómo mueren las democracias*. Ciudad de México: Ariel.
- LEWIT, Agustín. 2015. “Elecciones presidenciales Uruguay 2014”. En MARTÍN CARRILLO, Sergio, DE GORI, Esteban (Coords.). *Disputas por el poder*. Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales, 121-134.
- MEJÍA, Thelma. 2019. “Honduras: crisis políticas, patrones comunes y aspectos novedosos, 1985-2017”. En ROMERO BALLIVIÁN, Salvador y CASTELLANOS, Julieta (Dirs.). *Encrucijadas de la democracia en Honduras y América Central*. Tegucigalpa: UNAH e Instituto Nacional Demócrata, 271-299.
- MENEGUELLO, Rachel y ARQUER, Monize. 2018. “Las elecciones brasileñas de 2014: un país partido por la mitad”. En ALCÁNTARA SÁEZ, Manuel, BUQUET, Daniel y TAGINA, María Laura (eds.). *Elecciones y partidos en América Latina en el cambio en siglo*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 75-104.

- MORALES, Sergio y MORALES, Oswaldo. 2019. "De sobornos a corrupción internacional: el caso Odebrecht". *Emerald Emerging Market Cases Studies*, 9 (3): 1-18.
- MOTTER, Maité Cecilia y PAZ, Florencia. 2017. "Apuntes sobre las movilizaciones sociales en Chile y Uruguay durante el último periodo electoral (2011-2014)". En PINILLOS, Cintia, CAVAROZZI, Marcelo y MELLA, Marcelo (Comps.). *Itinerarios políticos contemporáneos*. Rosario: Universidad Nacional de Rosario, 69-90.
- MUÑOZ, Paula. 2021. "América Latina erupciona: Perú gira al populismo". *Elecciones*, 20 (22), 283-305.
- NOELLE-NEUMANN, Elisabeth. 1984. *The Spiral of Silence: Public Opinion-our social skin*. Chicago: Chicago University Press.
- OLLIER, María Matilde. 2010. "La reinención del presidencialismo: el caso argentino en perspectiva sudamericana". En: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Democracia intercultural y representación política en América Latina. La Paz: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 47-63.
- ORTUÑO, Armando. 2022. "El ciclo 2020-2021 desde la geografía electoral: complejidad territorial y diversidad del voto". En SOUVERAIN, Jan y EXENI, José Luis (Coord.). *Reconfiguración del campo político en Bolivia (balance y horizontes del ciclo electoral 2020-2021)*. La Paz: Friedrich Ebert Stiftung, 1-47.
- OVARES, Carolina. 2022. "Elecciones nacionales Costa Rica 2022: entre fuerzas políticas tradicionales y fuerzas emergentes". *Elecciones*, 21 (23), 253-266.
- PEÑA, María José y PUENTE, Andrea. 2022. "El acceso a la cobertura periodística e inclusión de actores políticos en las elecciones generales de 2020". En: LOAYZA, Rafael y MARTÍNEZ, Andrés (Coords.). *Mediación viral (comunicación política, fake news e información en las elecciones 2020)*. La Paz: Universidad Católica, IDEA Internacional, Plural, 119-152.
- PÉREZ GUADALUPE, José Luis. 2017. *Entre Dios y el César (el impacto político de los evangélicos en el Perú y América Latina)*. Lima: Instituto de Estudios Sociales Cristianos, Fundación Konrad Adenauer.
- PÉREZ GUADALUPE, José Luis. 2020. "El hermano no vota al hermano. La inexistencia del voto confesional y la subrepresentación política de los evangélicos en América Latina", *Ciencias sociales y Religión* (22), 1-29.
- PÉREZ-RUBIERA, Omar. 2020. "COVID-19 en la coyuntura electoral dominicana". En PUIG, Salvador y ALCÁNTARA SÁEZ, Manuel (eds.). *Política y crisis en América Latina: reacción e impacto frente a la COVID-19*. Madrid: Marcial Pons, 307-325.

- PIKETTY, Thomas. 2013. *Le capital au XXIème siècle*. Paris: Seuil.
- PINILLOS, Cintia, IGLESIAS, Esteban, LUCCA, Juan Bautista e IAZZETA, Oswaldo (Comps.). 2022. *La democracia a prueba (los años que votamos en la pandemia en las Américas)*. Buenos Aires: CLACSO.
- OUALALOU, Lamia. 2018. *Jésus je t'aime (la déferlante évangélique)*. Paris: Le Cerf.
- RIBEIRO, Ednaldo; CARREIRAO, Yan y BORBA, Julian. 2016. "Sentimientos partidarios e antipetismo: condicionantes e covariantes". *Opinao Pública*, 22(3), 603-237.
- RAMÍREZ, Sergio. 2020. *Tongolele no sabía bailar*. Ciudad de México: Alfaguara.
- ROMERO BALLIVIÁN, Salvador. 2021. *Elecciones en América Latina*. La Paz: IDEA Internacional, Tribunal Supremo Electoral.
- ROMERO BALLIVIÁN, Salvador. 2022. *El ciclo electoral boliviano de la crisis de 2019 a los comicios de 2021*. La Paz: Friedrich Ebert Stiftung.
- SALOMÓN, Leticia. 2022. "Los desafíos de Xiomara Castro en Honduras". *Nueva Sociedad*, 299, 134-144.
- SANTOS, Fabiano y TANSCHKEIT, Talita. 2019. "Quando velhos atores saem de cena: a ascensão de nova direita política no Brasil". *Colombia Internacional*, 99, 151-186.
- SCHWEISGUTH, Étienne. 2006. *Le libéralisme culturel aujourd'hui*. Paris: CEVI-POF y Ministère de l'Intérieur.
- SEILER, Daniel-Louis. 2003. *Les partis politiques en Occident (sociologie historique du phénomène partisan)*. Paris: Ellipses.
- SOUVERAIN, Jan y EXENI, José Luis (Coords.). 2022. *Reconfiguración del campo político en Bolivia (balance y horizontes del ciclo electoral 2020-2021)*. La Paz: Friedrich Ebert Stiftung.
- SOSA VILLAGARCÍA, Paolo y HURTADO, Verónica. 2021. "COVID-19 and presidential popularity in Latin America". *Revista Latinoamericana de Opinión Pública*, 10 (2), 71-91.
- TALEB, Nicolas. 2020. *Jugarse la piel*. Ciudad de México: Paidós.
- TAGINA, María Laura, 2018, "Argentina, kirchnerismo y después: la alternancia electoral de 2015". En: ALCÁNTARA SÁEZ, Manuel, BUQUET, Daniel y TAGINA, María Laura (eds.). *Elecciones y partidos en América Latina en el cambio en siglo*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 21-46.
- TREMINIO, Ilka y MUÑOZ PORTILLO, Juan Manuel. 2019. "La reelección presidencial en Centroamérica: estrategias desesperadas de retención del poder". En ROMERO BALLIVIÁN, Salvador y CASTELLANOS, Julieta (Dir.). *Encrucijadas de la democracia en Honduras y América Central*. Tegucigalpa: UNAH, Instituto Nacional Demócrata, 101-122.

- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. 2022. *Programa permanente de lucha contra la desinformación en el marco de la justicia electoral de Brasil*. Brasilia: Tribunal Superior Eleitoral.
- VELASCO, Juan, TORRES, Jaime y BURGOS, Mónica. 2018. “Entre votos y almas: participación de las iglesias evangélicas en las elecciones de Congreso 2018 en Colombia”. En BARRERO, Fredy (ed.). *Elecciones presidenciales y de Congreso 2018*. Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung, 275-298.
- ZAKARIA, Fareed. 2007. *The Future of Freedom (Illiberal Democracy at Home and Abroad)*. Nueva York: Norton.
- ZÚÑIGA, César. 2018. “Costa Rica: el poder evangélico en una democracia estable”. En PÉREZ GUADALUPE, José Luis y GRUNDBERGER, Sebastián (eds.). *Evangélicos y poder en América Latina*. Lima: Konrad Adenauer Stiftung e Instituto de Estudios Social Cristianos, 247-282.